

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos noveno a vigésimo séptimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar presente:

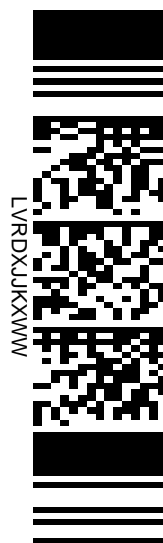
1° Que en primer término es dable señalar que la demanda fue impetrada en contra del Ministerio de Educación, representado a su vez por el Consejo de Defensa del Estado, por lo que sólo corresponde analizar las conductas que hubieren sido denunciadas como constitutivas de falta de servicio en los escritos de demanda y réplica en relación a dicha cartera de Estado.

Es así como en un primer término, se alude expresamente que la histórica crisis institucional de ARCIS impulsó la incorporación de diversos socios estratégicos, quienes inyectaron recursos siempre insuficientes para superar el déficit financiero, lo que motivó la contratación de diversos compromisos crediticios con bancos, hipotecando el patrimonio inmobiliario de la Universidad en diversas ocasiones, para permitir mínimamente la continuidad de giro. Explica que, por lo mismo, gran responsabilidad de la crisis final, previa al nombramiento del administrador provisional fue la decisión de las autoridades de la época, de no acreditarse en el proceso de octubre de 2014, con lo que, la Universidad dejó de percibir ingresos por CAE que, en años anteriores, lamentablemente representó la mayoritaria (y casi exclusiva) entrada de recursos económicos a la institución. Agrega que la pérdida de ese financiamiento, dejó sin liquidez a la Universidad, detonando una insolvencia financiera terminal. Asevera que, como tal decisión no correspondía a un “acto del gobierno”, la Comisión solamente puede lamentarse por esa decisión que, con el tiempo, demostró ser profundamente errada.

Posteriormente, la demandante hace alusión a diversos actos en el acontecer de la universidad, de desprestigio a los alumnos de la mentada casa de estudios y a la problemática económica que ha debido enfrentar. Asimismo, refiere que, con fecha 24 de mayo de 2017, en Acuerdo N° 28/2015, el Consejo Nacional de Educación aprobó la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica de ARCIS, por el Ministerio de Educación.

Luego, cita los artículos 11 de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, los artículos 1, 2, 4, 8, 19 y 20 de la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior y finalmente los artículos 4, 5, 6 y 8 de la Ley N° 18.956 sobre el Ministerio de Educación.

En consecuencia, de lo señalado precedentemente no se advierten imputaciones o atribuciones de responsabilidad precisas y determinadas de infracción de algún deber de parte del Ministerio de Educación, por cuanto sólo en



el acápite final alude que existe daño directo en la demandada, dado que, por los actos de demora, negligente del organismo estatal, como “protector de sus derechos y restaurador”, aunado a que no ha podido después de casi tres años rendir su examen final para titularse, poder trabajar, además de los perjuicios inevitables de su condición mental no saludable. En otros términos, no se identifica por parte del demandante una conducta u omisión atribuible a un órgano estatal y que esté conectada causalmente con el perjuicio que se invoca, debiendo regir a su respecto el principio de la congruencia procesal -el que se refiere a la conformidad que ha de existir entre la sentencia expedida por el órgano jurisdiccional y las pretensiones que las partes hayan expuesto oportuna y formalmente en sus escritos fundamentales agregados al proceso-.

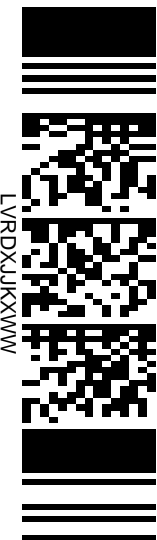
De esta forma, se colige que, además de la actuación tardía, la única infracción denunciada respecto de la demandada es la omisión consignada en el párrafo que precede, debiendo por tanto determinarse si le empecía al Ministerio de Educación gestionar -en tiempo- la materialización o rendición del examen de grado de la actora en la nueva casa de estudios respecto de la cual se celebró el correspondiente convenio –con la Universidad del Maule-.

2° Que, en este orden de ideas, sin perjuicio del contexto y alcances de lo consignado en la motivación que precede, resultó probado que desde que se inició el período de crisis de la Universidad ARCIS, el Ministerio de Educación realizó las siguientes acciones:

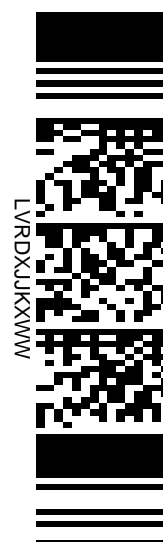
1. En abril de 2014, luego que la demandada recibiera denuncias sobre las irregularidades que atravesaba la Universidad ARCIS -oportunidad en que se le comunicó la renuncia con publicidad de ocho miembros del Directorio de la referida casa de estudios exponiendo como motivos de lo anterior razones de "debilidad institucional", "desorden administrativo", "ingobernabilidad", "fragilidad económica", entre otras y que "los socios estratégicos", habían decidido efectuar el retiro de los fondos correspondientes a su "inversión inicial"- instruyó un procedimiento de investigación a fin de determinar la eventual concurrencia de causales de revocación de reconocimiento oficial y pérdida de personalidad jurídica de la institución.
2. Paralelamente, el Ministerio de Educación recibió una denuncia formal, respaldada por la mayoría de los estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad ARCIS, acerca de diversas falencias y situaciones que afectaban directa y seriamente el servicio educacional recibido, incorporándose la anterior al mentado procedimiento de investigación.



3. Con fecha 28 de octubre 2014, se declaró finalizado el procedimiento de investigación, el que fue remitido al Consejo Nacional de Educación a fin de solicitar el acuerdo de dicho organismo para cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de las carreras de "Canto Popular", "Composición y Arreglos" e "Intérprete Instrumental de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales -ARCIS.
4. Mediante Acuerdo N° 027/2015, de fecha 29 de abril de 2015, dicho órgano decidió informar favorablemente la recomendación formulada por el Ministerio de Educación, por cuanto se había acreditado la configuración de la causal dispuesta en la letra a) del artículo 64 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación; esto es, no cumplir con sus objetivos estatuarios.
5. Con fecha 23 de enero de 2015, se comunicó a la División de Educación Superior del Ministerio de Educación acerca de las condiciones en que se sostenía la Escuela de Cine de la Universidad ARCIS, cuyo cuerpo docente no había recibido sus correspondientes honorarios y remuneraciones durante el segundo semestre del año 2014, adeudando incluso, en diversos casos, el primer semestre.
6. Mediante Resolución Exenta N° 684 de fecha 29 de enero de 2015, la Subsecretaría de Educación ordenó instruir un proceso de investigación preliminar respecto del plantel, a objeto de determinar si la institución se encontraba en alguna de las situaciones o causales establecidas en los artículos 3 y 6 de la Ley N° 20.800, que "Crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior".
7. Con fecha 1 de junio de 2015, la Subsecretaría de Educación aprobó la instrucción de investigación preliminar respecto de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales -ARCIS-, proponiendo la medida establecida en el literal b) del artículo 4 de la Ley N 20.800; a saber, nombrar un Administrador Provisional.
8. Con fecha 1 de julio de 2015, el Consejo Nacional de Educación se pronunció acerca de la recomendación efectuada por el Ministerio de Educación adoptando el Acuerdo N° 040/2015, en el sentido de aprobar la medida de nombramiento de un Administrador Provisional, en atención a que se había constatado la concurrencia de las circunstancias establecidas en las letras a) y b) del artículo 6 de la Ley N° 20.800 respecto del plantel universitario.



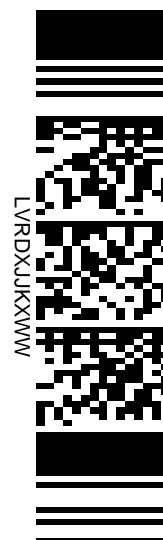
9. Mediante Resolución Exenta N° 5150, de 15 de julio de 2015, la Subsecretaría de Educación puso término al procedimiento instruido en virtud de los artículos 3 y 6 de la Ley N° 20.800 y designó a don Patricio Velasco Sanhueza como Administrador Provisional de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales - ARCIS-, quien fue notificado y aceptó el cargo.
10. Posteriormente, el Consejo Nacional de Educación convino, mediante Acuerdo N° 55/2016 de 31 de agosto de 2016, prorrogar el nombramiento del Administrador Provisional, de conformidad al artículo 12 de la Ley N° 20.800, el que no posee facultades para alterar el modelo educativo, ni los planes y programas de la institución superior sujeta a la medida.
11. El demandado conforme a los informes trimestrales de la gestión del Administrador Provisional propuso al Consejo Nacional de Educación, mediante Resolución Exenta N° 1746, de 4 de abril de 2017, dispuso la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales -ARCIS, por haberse demostrado que la casa de estudios incumplió sus objetivos estatutarios, configurándose la causal establecida en la letra a) del artículo 64 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, así como la contemplada en el inciso cuarto del artículo 20 de la Ley N° 20.800.
12. Mediante Acuerdo N° 28/2017, de fecha 24 de mayo de 2017, el Consejo Nacional de Educación decidió informar favorablemente al Ministerio de Educación respecto de dicha recomendación, por cuanto se había acreditado la configuración de la causal dispuesta en la letra a) del artículo 64 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación.
13. Con fecha 29 de junio de 2017, mediante Decreto N° 136 del Ministerio de Educación, se procedió a cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a la Universidad de Artes y Ciencias Sociales -ARCIS-.
14. El Consejo Nacional de Educación, en Acuerdo N° 41/2017 de 2 de agosto de 2017, aprobó la medida de nombramiento de Administrador de Cierre para la referida institución.
15. En mérito de dicha aprobación, mediante Resolución Exenta N° 4669 de 11 de agosto de 2017 del Ministerio de Educación, designó a don Jorge Rojas Neira, de profesión abogado y contador auditor, como



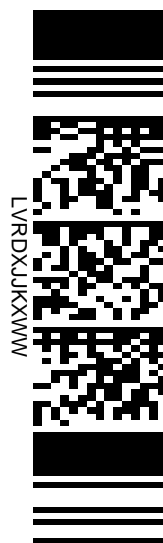
Administrador de Cierre de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales -ARCIS-.

3° De manera paralela e independientemente a estos procesos administrativos:

1. Con fecha 28 de febrero de 2017, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en autos caratulados "Cáceres con Universidad de Arte y Ciencias Sociales - ARCIS", Rol C-1573-2016, declaró la liquidación forzosa de la Universidad ARCIS, designando como liquidador concursal a don Cristián Herrera Rahilly.
2. Con fecha 6 de diciembre de 2017, la Casa Central de la Universidad ARCIS fue tomada por un grupo de estudiantes, quienes plantearon una serie de demandas tanto al Administrador de Cierre como al Ministerio de Educación. Los alumnos impidieron el ingreso de las autoridades del plantel, haciendo imposible acceder a los registros curriculares y de matrícula, información indispensable para llevar a efecto las adaptaciones del Plan de Cierre.
3. A pesar de la situación que afectaba a la Casa Matriz, en virtud de gestiones iniciadas por el Ministerio de Educación, la Universidad ARCIS continuó tomando exámenes de grado y/o de licenciatura que estaban previamente agendados, todo ello con el fin de velar por la continuidad de estudios de los estudiantes. De esta forma, el administrador de cierre ofició en estos procesos como ministro de fe, de conformidad a las facultades que le otorga la ley.
4. En dicho procedimiento judicial, con fecha 03 de enero de 2018, la Junta de Acreedores, amparándose en el artículo 237 de la Ley N° 20.720, accedió a la petición del liquidador -Cristián Herrera-, de poner término anticipado al giro de la Universidad y desvincular a toda la planta docente y administrativa.
5. Por su parte, el Administrador de Cierre impugnó los acuerdos celebrados por la Junta de Acreedores que pusieron fin al giro de la institución, requiriéndose el fin de la liquidación e incidentó sobre la esencialidad de ciertos bienes necesarios para la continuidad de estudios de los alumnos.
6. El signado tribunal, con fecha 26 de enero de 2018, negó lugar a las incidencias de nulidad sobre los Acuerdos de la Junta de Acreedores y, con fecha 13 de julio de 2018, se declaró incompetente para emitir pronunciamiento sobre la esencialidad de los bienes discutidos, entregando tal decisión a la Junta de Acreedores.



7. En enero de 2018, la División de Educación Superior, mediante Oficio N° 06/62 dirigido al Liquidador de Universidad ARCIS y con copia a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, informó que los dineros otorgados en virtud de becas o beneficios estatales y los recursos provenientes de los créditos con garantía estatal, revisten el carácter de bienes esenciales para la continuidad de estudios, razón por la que no pueden tener una destinación distinta al financiamiento académico.
8. A través del Oficio N° 363 de 02 de febrero de 2018, la División de Educación Superior requirió al Administrador de Cierre informar sobre la custodia y entrega de antecedentes académicos, todo ello en atención a la próxima mudanza por la que atravesara la institución, atendido que se tornaba indispensable asegurar que los registros curriculares se mantuviesen en completa integridad.
9. En cuanto al plan de cierre previsto en el artículo 23 de la Ley N° 20.800, con fecha 20 de octubre de 2017, el Administrador de Cierre hizo llegar a la División de Educación Superior el referido plan, al que ésta formuló diferentes observaciones mediante Ord. N° 964 de 19 de marzo de 2018.
10. El Ministerio de Educación, por Resolución Exenta N° 1886 de 11 de abril de 2018, formuló una serie de observaciones dirigidas a actualizar la información sobre los flujos y estructura de gastos de la Universidad, todo ello en virtud de las alternativas de movilidad y reubicación de que disponen los alumnos.
11. Con fecha 24 de julio de 2018, el Administrador de Cierre subsanó las observaciones formuladas al referido plan, el que, finalmente, fue aprobado mediante la Resolución Exenta N° 4185, de 9 de agosto de 2018, de la División de Educación Superior.
12. Paralelamente, en el marco del Comité de Coordinación - previsto en el Decreto N° 576 de 2015, del Ministerio de Educación, que establece mecanismos de coordinación entre los procedimientos previstos en la Ley N° 20.800 y en la Ley N° 20.720-, la División de Educación Superior efectuó múltiples gestiones con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, las que permitieron reabrir el giro de la institución - que había sido terminado por Acuerdo de la Junta de Acreedores de la Universidad - y con ello cerrar correctamente el año académico 2017 que no había concluido a causa de la toma del plantel, que se extendió hasta marzo de 2018.



13. Advirtiéndose la problemática legal de coexistencia entre un Administrador de Cierre y un Liquidador, se conformó una mesa de trabajo con la Superintendencia, destinada a evaluar y proponer modificaciones a la Ley N° 20.800.

4° Por su parte, respecto a la carrera de la demandante, a través del Ord. N 06/894, de 9 de marzo de 2018, la División de Educación Superior tomó contacto con el Consejo Nacional de Educación (CNED) para que dicho organismo examinase a los alumnos egresados de derecho de la Universidad ARCIS, siempre que éstos manifestaran su voluntad de rendir la licenciatura ante tal entidad.

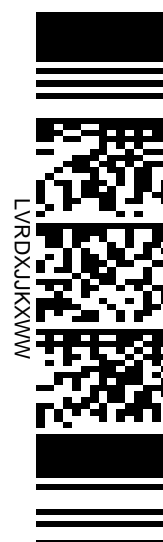
Asimismo, mediante el Ord. N° 06/1267, de 17 de abril de 2018, con el propósito de evitar inconvenientes durante el proceso de titulación de los egresados de derecho, la División de Educación Superior solicitó la participación de la Corte Suprema a fin de constituir una mesa de trabajo destinada a precaver y resolver las dificultades que se pudiesen presentar en él de los egresados y licenciados en la carrera de Derecho de la Universidad ARCIS.

En este orden de ideas, con fecha 29 de agosto de 2018, se celebró un Convenio de Colaboración Académica-Administrativa entre la Universidad ARCIS, la Universidad Católica del Maule (UCM) y el Ministerio de Educación para Garantizar la Continuidad de Estudios de los alumnos de la Universidad ARCIS, asumiendo la segunda, el rol de institución tutora del proceso de cierre de esta última, resguardando el avance académico que presentan sus estudiantes, respetando las mallas y programas académicos de la casa de estudios original, cautelándose los intereses de sus alumnos.

Asimismo, con el mismo objetivo señalado, las autoridades de la Universidad Católica del Maule también se reunieron con diversos actores de la comunidad ARCIS.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación realizó exitosas gestiones con la Junta Nacional de Auxilio y Becas -JUNAEB-, con el propósito de establecer la fórmula mediante la cual los alumnos de ARCIS podrían validar su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a partir de junio de 2018.

Finalmente, luego de múltiples reuniones entre los actores involucrados y el Ministerio de Educación, con fecha 29 de agosto de 2018 se celebró un Convenio de Colaboración Académica-Administrativa entre la Universidad ARCIS, la Universidad Católica del Maule (UCM) y el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad de estudios de los alumnos de la Universidad ARCIS. En virtud de dicho convenio, la UCM asumió el rol de institución tutora del proceso de cierre de la Universidad ARCIS, resguardando el avance académico de sus estudiantes y

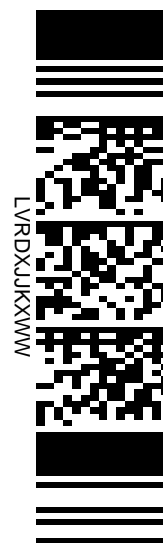


respetando las mallas y programas académicos de su universidad de origen. De esta forma, se establece en el referido acuerdo, que los estudiantes deben rendir sus exámenes de grado o de titulación ante la Comisión de Título o Grado respectiva, constituida al efecto por el Coordinador Académico y en presencia de un ministro de fe designado por el Administrador de Cierre; a su vez, los títulos profesionales y/o grados de licenciados en cuestión, ser emitidos por la Universidad ARCIS a través del Administrador de Cierre, salvo para el caso específico de la carrera de derecho, cuya titulación corresponde a la Corte Suprema. Se estipuló también que, en caso que el proceso de titulación o graduación antes descrito no lo pueda realizar la UCM, podrá a ser ejecutado por el Ministerio de Educación con el apoyo del Consejo Nacional de Educación.

5° Que, en este orden de ideas, es dable señalar que las circunstancias en las que el Ministerio de Educación se vio en la obligación legal de intervenir tienen su origen en la crisis financiera de la Universidad ARCIS, en la que la demandada no tuvo responsabilidad alguna, por cuanto dicho acontecer se originó en la decisión de los sostenedores de dicha casa de estudios de retirar los fondos de caja de la anterior, precipitando de ese modo su crisis financiera, proceder en el que la demandada no tenía atribuciones para fiscalizar o intervenir, por cuanto sólo posee facultades para proceder *ex post* en resguardo de los intereses académicos de los estudiantes los que, como se ha expuesto precedentemente, se han ejercido plenamente en la especie, respetándose los principios de legalidad y juridicidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental y en el artículo 2 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y de autonomía académica, económica y administrativa de la casa de estudios antes citada -artículo 2 letra a) de la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior-, garantizándose en consecuencia, la continuidad y término de estudios de todos los alumnos de Universidad ARCIS.

Es así como la demandante cursó y concluyó sus estudios superiores en una universidad privada de la cual egresó a principios del año 2016 y que cayó en un estado de insolvencia. Por tanto, el Estado y sus órganos carecen de potestades para intervenir en la determinación de las obligaciones que asumen las respectivas entidades, ya sean de índole económica o contractual y, de este modo, no define ni participa en la determinación de los servicios que contrata y en la especie el Ministerio de Educación no tiene atribuciones para garantizar la permanencia de un plantel, la empleabilidad y la competitividad de una carrera profesional.

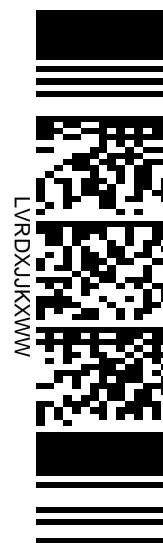
En efecto, conforme al análisis del artículo 8 de la Ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación Pública y de la Ley N° 21.091 -publicada



en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2018- se colige que el Ministerio de Educación posee diversas facultades y tareas orientadas a obtener un mejor funcionamiento en el ámbito de la educación superior -en materias de calidad, de financiamiento, de regulación, como en otras-, pero carece de atribuciones para garantizar la permanencia de un plantel, la empleabilidad y la competitividad del egresado de una carrera profesional impartida en un determinado centro de estudios, como pretende la demandante.

6° Por su parte, corresponde aclarar que antes de la dictación de la Ley N° 20.800, el marco legal en materia de educación superior contemplaba una débil regulación de las facultades del Ministerio de Educación para fiscalizar el cumplimiento, por las instituciones de Educación Superior, de la normativa que rige al sistema, así como las medidas a adoptar en caso de incumplimiento, circunstancia por lo demás reconocida por la propia actora en su réplica al admitir que concurrió al Congreso *“haciendo ver el vacío legal a la Comisión de Educación”*. Atendido lo anterior, la citada normativa reguló los casos en que una determinada institución de educación superior incurriese en hechos que pusieren en riesgo el cumplimiento de los compromisos académicos asumidos o bien su viabilidad administrativa y/o financiera, introduciendo nuevos elementos que permitiesen resguardar los derechos de los estudiantes. De esta forma, uno de los principales objetivos de la Ley N° 20.800 fue consagrar mecanismos que, ante una situación de crisis de una institución de educación superior, permitan enfrentar los problemas teniendo como directriz la protección de los estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios, el buen uso de todos los recursos de la institución con tal propósito y el resguardo de la fe pública comprometida, otorgando facultades y fijando procedimientos acordes a dichos objetivos.

En efecto, la Ley N° 20.800 otorga, principalmente en su artículo 13, diversas facultades al Administrador Provisional, norma que, por disposición del artículo 20 de dicha ley, se hace extensiva al Administrador de Cierre. Por su parte, las limitaciones a dichas funciones están circunscritas a la ley, los estatutos y a toda otra normativa vigente al interior del plantel educacional. En coherencia con lo anterior, el artículo 13 de la Ley N° 20.800 establece que el administrador asumirá, para el cometido de su gestión, el gobierno y la administración de la entidad sujeta a la medida, correspondiéndole en consecuencia, la representación legal y todas aquellas facultades que la ley y los respectivos estatutos o escritura social le otorgaban a las autoridades originales de la casa de estudio, quienes, en virtud del artículo 17 del mismo cuerpo legal, quedarán suspendidas en sus funciones desde el momento de su nombramiento. En ese sentido, el Administrador de Cierre asume las potestades que se le otorgan, emanadas de la



ley y los estatutos sociales y las demás normativas internas. De esta forma, si bien el Ministerio de Educación es el encargado de evaluar la conveniencia y procedencia del nombramiento de un Administrador de Cierre, contando con el acuerdo del Consejo Nacional de Educación y, aunque le corresponde administrar los procesos asociados al cierre del plantel, no es dicha Secretaría de Estado ni el Consejo quienes delegan sus facultades al Administrador de Cierre, pues aquellas provienen del expreso mandato que la ley y los estatutos sociales otorgaban a sus anteriores autoridades.

7° A mayor abundamiento, respecto de las acciones efectuadas por el Ministerio de Educación, debe tenerse presente que la Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, en su Partida 09, Capítulo 01, Programa 30, correspondiente a Educación Superior, Glosa 04 sobre Becas de Educación Superior, señala lo siguiente: *"El Programa de Becas de Educación Superior se ejecutará de acuerdo al Decreto N° 97, de 2013, del Ministerio de Educación y sus modificaciones.*

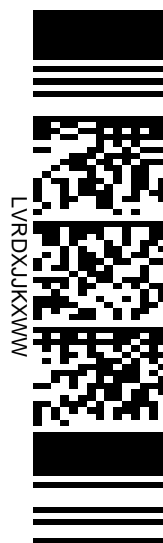
Dichas becas de arancel serán asignadas a cada alumno postulante, por el Ministerio de Educación".

Dicho programa considera en su letra j) el siguiente beneficio:

"j) Beca de continuidad de estudios para alumnos de instituciones en cierre \$3.415.814 miles que se asignarán a estudiantes que habiendo estado matriculados con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, y que aún no hayan egresado de sus respectivas carreras, en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales - ARCIS y que, habiendo manifestado su intención de acceder a este beneficio, durante el año 2018 se matriculen en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales - ARCIS o en instituciones de educación superior que cuenten con acreditación institucional de al menos tres años, vigente al 31 de diciembre de 2017, conforme a la Ley N° 20.129.

En el caso de las becas que se asignen a estudiantes matriculados en el año 2018 en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales - ARCIS, los recursos que se transfieran por este concepto sólo podrán ser utilizados para financiar la continuidad de estudios de los estudiantes beneficiarios en dicha universidad, debiendo ser administrados por el Administrador de Cierre designado por el Ministerio de Educación según lo dispuesto por la Ley N° 20.800 y su Reglamento, para efectos de la implementación de su plan de administración, y tendrán la calidad de bienes esenciales, en los términos establecidos en el artículo 21 de la referida ley."

Atendido el texto de la citada glosa de la actual Ley de Presupuestos, queda de manifiesto que en el caso de los estudiantes provenientes de la



Universidad de Arte y Ciencias Sociales - ARCIS, aquélla contempla la beca para todos aquellos estudiantes que, habiendo manifestado su intención de acceder a este beneficio, se matriculen en Universidad ARCIS o en otras instituciones de educación superior que cuente con acreditación institucional de al menos tres años, vigente al 31 de diciembre de 2017, conforme a la Ley N° 20.129.

Por su lado, la Ley N° 21.091 modificó el artículo 24 de la Ley N° 20.800, en el sentido de aumentar el requisito de años de acreditación de un plantel para celebrar convenios de movilidad. Así, dicho precepto establece que, para efectos de lo señalado en el presente artículo, el administrador de cierre podrá suscribir convenios con alguna de las instituciones de educación superior que cuenten con acreditación institucional vigente de al menos cuatro años, conforme a lo previsto en la Ley N° 20.129, preferentemente una universidad del Estado.

8° En cuanto a la falta de servicio la Corte Suprema ha manifestado que *“(…) resulta necesario consignar que la falta de servicio constituye un sistema de responsabilidad de la Administración del Estado construido dogmática y jurisprudencialmente en base a lo preceptuado por los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la Republica, así como en base a otras normas infra constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la del artículo 44 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que dispone “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”*” (Corte Suprema, Rol N° 21.793/2017, de 27 febrero 2018).

Por su parte, en cuanto al factor de atribución según la jurisprudencia se ha expresado: *“(…) en lo fundamental, la falta de servicio es el factor de atribución general de la responsabilidad patrimonial de la Administración, vale decir, el fundamento jurídico en cuya virtud los costos de los daños experimentados por un particular son asumidos por aquélla, conforme lo dispone el artículo 42 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado*” (Corte Suprema, Rol N° 101.739/2016, de 13 febrero 2018; Rol N° 35.228/2017, de 25 junio 2018; Rol N° 11.761/2017, de 12 julio 2018; Rol N° 38.036/2017, de 25 julio 2018; Rol N° 1.033/2018, de 19 noviembre 2018; Rol N° 12.221/2017, de 19 abril 2018).

De acuerdo con este razonamiento y ampliándolo, puede no exigirse para la responsabilidad de la persona jurídica Estado, la culpa o dolo de sus órganos o representantes; por cuanto basta con que el comportamiento del servicio público sea distinto al que debiera considerarse como su comportamiento normal; o sea,



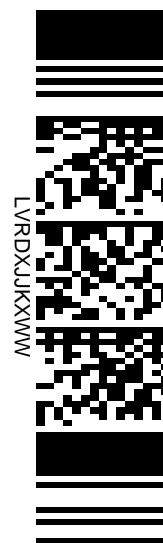
basta con probar una falta de servicio. (Corte Suprema, Rol N° 39.848/2017, de 2 octubre 2018).

Asimismo, en cuanto al alcance de la aplicación del concepto de falta de servicio, este factor de imputación no se limita a la responsabilidad de los órganos de la Administración del Estado solamente al ejercicio de la función específica encargada por la ley, sino que se manifiesta en la actuación de él, sea que se relacione o no con su misión específica, pero que sea necesario que la desarrolle o simplemente que la lleve adelante por decisión de sus autoridades y lo anterior se realice como parte de las funciones generales propias de todo servicio. Es decir, no es necesario que el mal funcionamiento se relacione exclusivamente con la prestación del servicio público que debe entregar el órgano, pues basta que aquella se presente en el funcionamiento de aquél, toda vez que los artículos 4 y 42 de la Ley N° 18.575, consagran un sistema de responsabilidad general, aplicable a toda la Administración. (Corte Suprema, Rol N° 97.722/2016, de 23 de enero de 2018).

En efecto, en relación con las hipótesis de concurrencia de la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo o lo hacer irregular o tardíamente, operando, así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575. (Corte Suprema, Rol N° 5.094/2017, de 17 enero 2018).

En particular, *“La falta de servicio se puede conceptualizar como la actuación ilegítima de la Administración (...) consistente en el incumplimiento de obligaciones de parte de un órgano del Estado (...) [que] se produce con motivo de: a) la ausencia total u omisión de funcionamiento de la Administración debiendo hacerlo, mediante la correspondiente actuación;”. b) un mal, inadecuado, deficiente o indebido funcionamiento; c) el funcionamiento inoportuno, que se produce al desempeñar las atribuciones, actuar los órganos, ejecutar las prestaciones, cumplir las funciones o emplear las competencias de manera tardía, o d) un funcionamiento irregular de la Administración, institucionalmente considerada, esto es, contrariamente a lo que corresponde a un comportamiento común y ordinario exigible a un servicio moderno”*. (Corte Suprema, Rol N° 35.228/2017, 25 de junio 2018.)

En consecuencia, la procedencia de la hipótesis de cumplimiento anormal de las funciones se debe analizar considerando *“(...) entre otros aspectos la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une la víctima con el servicio [sic], el grado de previsibilidad del daño y las*



circunstancias de tiempo y lugar”. (Corte Suprema, Rol N° 35.228/2017, de 25 junio de 2018).

En cuanto a los requisitos de procedencia del régimen responsabilidad por falta de servicio se encuentran: 1) El funcionamiento anormal del servicio o simplemente falta de servicio, pudiendo tratarse de una falta de la organización o defecto en el funcionamiento de ella -grave-, el que puede tener su origen en una actuación jurídica ilegal sin perjuicio que no toda actuación ilegal constituye falta de servicio; 2) El daño, esto es, que el actuar de la Administración lo hubiera ocasionado directamente, no encontrándose amparado en una causal de justificación, y; iii) El nexo causal, esto es, debe existir una relación de causalidad directa entre la actuación de la Administración del Estado y el daño sufrido, debiendo tener el hecho que ocasiona el daño una cierta aptitud, en cuanto debe ser capaz para producir el daño que se reclama”. (Corte Suprema, Rol N° 97.722/2016, de fecha 23 de enero 2018).

9° Que con fecha 13 de febrero de 2019 se recibió la causa a prueba fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

- a) La efectividad de haber el Estado faltado al deber de otorgar derecho a la educación a doña Alejandra Yanina Salazar Ponce, con ocasión del proceso de término de cierre provisional de la Universidad ARCIS, hechos y circunstancias;
- b) La efectividad de constituir la conducta descrita en el anterior, una falta de servicio del Estado;
- c) La efectividad de existir una relación de causalidad entre el hecho ilícito imputable al Estado y los perjuicios invocados por la demandante, hechos y circunstancias; y
- d) La existencia, naturaleza, monto y extensión de los perjuicios invocados por la actora.

Al respecto resulta pertinente señalar que, si bien el artículo 1698 del Código Civil establece que: *“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”*, lo cierto es que el desarrollo de la jurisprudencia ha redefinido *el onus probandi*, expresando que corresponde la carga probatoria a quien reclama del órgano jurisdiccional la declaración de un derecho, puesto que debe justificar los hechos que constituyen los supuestos de existencia y validez de la pretensión. Del mismo modo, le asiste a quien sustenta la oposición, acreditar la procedencia y los hechos fundantes de la misma, esto es, que los sucesos que impiden, modifican, transforman o extinguen la pretensión proceden en el evento que se reclama y se encuentren acreditados. Son los presupuestos de la pretensión, en este caso el hecho calificado de falta de servicio, el que



corresponde probar al actor y aquellos que tienden a desvirtuarlos, son de cargo del demandado.

Es así como la Corte Suprema ha señalado que “(...) *quien la alega debe probar el mal funcionamiento del servicio, su funcionamiento tardío o el no funcionamiento del mismo; que esta omisión o acción defectuosa haya provocado un daño al usuario o beneficiario del servicio público de que se trata y, en fin, que la falla en la actividad del ente administrativo haya sido la causa del daño experimentado (...)*”. (Corte Suprema Rol N° 34.225/2017, de 29 junio 2018 y; Rol N° 1.033/2018, de 19 noviembre 2018).

10° Que, por otro lado, la sentencia en alzada condena a la demandada Ministerio de Educación por supuestos hechos atribuibles a un organismo autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio y que no ha sido demandado en estos autos -Comisión Nacional de Acreditación (artículo 6 de la Ley N° 20.800)-, aunado a que la atribución de responsabilidad respecto a la falta de gestiones en la rendición del examen de grado de la demandante implica desconocer el convenio que al efecto se realizó con la Universidad del Maule, no considerándose por parte de la sentenciadora *a quo* que las posibilidades de acceso tanto a beneficios como a concluir los estudios estaban establecidos en la ley -Ley de Presupuestos N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, en su Partida 09, Capítulo 01, Programa 30, correspondiente a Educación Superior, Glosa 04 sobre Becas de Educación Superior, antes citada- de la cual se desprende que se aplica a los estudiantes de la Universidad ARCIS que hubieren manifestado su intención de acceder a ese beneficio, se matriculen en la anterior o en otras instituciones de educación superior que cuente con acreditación institucional de al menos tres años, vigente al 31 de diciembre de 2017, conforme a la Ley N° 20.129.

De esta forma, según se ha indicado a través del Ord. N° 06/894, de 9 de marzo de 2018, la División de Educación Superior tomó contacto con el Consejo Nacional de Educación para que dicho organismo examinase a los alumnos egresados de derecho de la Universidad ARCIS, siempre que manifestaran su voluntad de rendir la licenciatura ante tal entidad. Asimismo, mediante el Ord. 06/1267, de 17 de abril de 2018, con el propósito de evitar inconvenientes durante el proceso de titulación de los egresados de derecho, la División de Educación Superior solicitó la participación de la Corte Suprema a fin de constituir una mesa de trabajo destinada a precaver y resolver las dificultades que se pudiesen presentar en el proceso de titulación de los egresados y licenciados en la carrera de derecho de la Universidad ARCIS, lo que se concretó mediante Decreto Exento N° 301 de 2019, del Ministerio de Educación.



Claramente con ocasión del referido convenio con el Consejo Nacional de Educación, el 19 de diciembre de 2019, dicho organismo llevó a cabo la primera examinación de estudiantes de derecho de la Universidad ARCIS.

De esta manera, se requiere que la actora se hubiere inscrito para dicho proceso y que cumpliera con las condiciones académicas habilitantes, de conformidad con lo certificado por el Administrador de Cierre de la Universidad ARCIS.

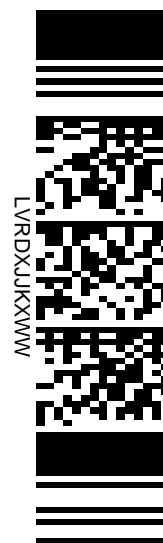
Asimismo, las acciones efectuadas en ese proceso se encuentran respaldadas por la comunicación al Consejo Nacional de Educación, de la Subsecretaría de Educación mediante Ord. N° 06/1198 de fecha 14 de noviembre de 2019 donde se informa sobre los inscritos habilitados para rendir dicho examen, así como por la actualización que, tanto el Ministerio de Educación, como el Consejo Nacional de Educación, proporcionan respecto de la información y de las etapas de examinación con acceso público para la referida comunidad estudiantil, a las que se accede mediante los enlaces que se indican.

Al respecto, corresponde indicar -además conforme los referidos alcances del artículo 1698 del Código Civil- que la actora no estaba obligada a acreditar un hecho negativo, como erróneamente se asevera en la sentencia liberándola de dicha carga, sino dos hechos positivos, cuales son haberse inscrito para el proceso y cumplir con las condiciones académicas habilitantes, lo que por cierto no aconteció.

11° Que en la especie no se ha acreditado la antijuridicidad o ilicitud en el obrar del Ministerio de Educación esto es, que hubiera actuado fuera del Estado de Derecho, dado que procedió dentro del ámbito de las atribuciones otorgadas por la Constitución Política y las leyes de la República. En consecuencia, no se acreditó -ni se indicó en la demanda y en la réplica- que la demandada hubiere actuado de manera defectuosa o tardía.

En efecto, del relato efectuado por la propia demandante en su libelo no se advierte ningún acto u omisión atribuible al Ministerio de Educación constitutivo de falta de servicio. Por el contrario, las conductas de la demandada -las que han sido latamente explicitadas- no son sino la manifestación del respeto irrestricto a la legislación vigente en orden a realizar todas las acciones tendientes a materializar un convenio con una universidad tutora, de manera de garantizar la continuidad de estudios de los estudiantes de la Universidad ARCIS; el que como se ha indicado se concretó el 29 de agosto de 2018 con la Universidad Católica del Maule.

11° Al respecto resulta ilustrador aclarar, que la demandante atribuye al Ministerio de Educación el supuesto incumplimiento de múltiples preceptos establecidos en la Ley N° 21.091, cuya entrada en vigor recién se produjo el 29 de



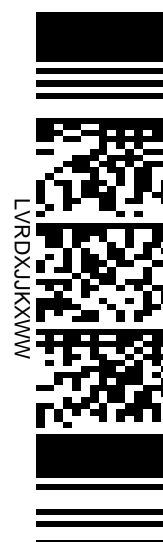
mayo de 2018; es decir, en forma muy posterior a los hechos en que funda su demanda, data en que no se encontraban operativas ni la Subsecretaría de Educación Superior, ni la Superintendencia de Educación Superior, razón por la que la actora atribuye a la demandada el incumplimiento de deberes propios de estas instituciones.

12° En cuanto a la supuesta transgresión del "Principio de Control" que refiere, contemplado en el artículo 11 de la Ley N° 18.575 es dable indicar que aquél se aplica respecto *"los organismos y de la actuación del personal de su dependencia"*, calidades que no revisten el Administrador de Cierre ni la Universidad ARCIS.

En efecto, si bien la doctrina y la jurisprudencia aceptan que el Estado conserve un deber de vigilancia y control sobre particulares en la realización de actividades como las que en la especie cumplía la Universidad ARCIS, aquello no implica que deba hacerse cargo de todos los daños causados por la signada casa de estudios, sino sólo aquellos en que mediando de una causa adecuada pueda imputarse a un funcionamiento anormal del Ministerio de Educación, lo que en la especie no aconteció.

13° A mayor abundamiento no debe olvidarse que la relación causal entre el hecho de la administración y los perjuicios es una exigencia propia no sólo del régimen de responsabilidad por daños del Estado, sino de toda responsabilidad extracontractual, presupuesto que en estos antecedentes no se configura, de acuerdo al relato efectuado por la actora en su demanda, los que dicen relación más bien con el estado financiero que gatilló la intervención de la Administración en dicho plantel. De esta manera, los sostenedores y "socios estratégicos" de la Universidad ARCIS, surgen como eventuales sujetos pasivos de las acciones resarcitorias planteadas por la demandante. Por su parte, en cuanto a los hechos discriminatorios de los que supuestamente habría sido víctima por su condición de egresada de la Universidad ARCIS, los que se habrían producido ante otros organismos públicos y entes privados, claramente no resultan atribuibles al actuar de la demandada, por lo que aquéllos pudieran ser denunciados conforme lo dispone la Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación.

14° Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, no se advierte contravención alguna a la Constitución o a las leyes de parte de la autoridad administrativa que permitan atribuirle responsabilidad en los hechos que motivan la presente causa por cuanto no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para imputar a la demandada una falta de servicio, según se ha indicado con antelación por lo que el acto que la sentenciadora *a quo* estimó tardío no es atribuible en forma alguna al Ministerio de Educación y por su parte, el



funcionamiento que estimó insuficiente no se condice por lo demás con el mérito del proceso y con los antecedentes que obran en las motivaciones antes desarrolladas.

15° Que, por otro lado, atendido que el actor tuvo motivo plausible para litigar, se le eximirá de su pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

De esta forma, de conformidad a las normas antes citadas, se **revoca** la sentencia apelada de fecha veintiuno de abril de dos mil veinte dictada por el 219° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol N° C-28200-2018 y se decide, en cambio, que se rechaza, sin costas, la demanda de fojas 1 interpuesta por doña Alejandra Yanina Salazar Ponce en contra del Ministerio de Educación.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la ministra Verónica Sabaj Escudero.

No firma el Abogado Integrante señor Benítez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 6967-2020



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

